

—*Ignacio M. Altamirano.*—*L. Velasquez.*
 —*M. Zavala.*—*Enrique Landa, Srío.*
 Son cópias. México, Julio 15 de 1875.
 —*Enrique Landa, secretario.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca por el C. Lic. Luis B. Santaella, en representación del reo Pedro Reyes, contra el C. Gefe político de Silacayoapan. por violacion de garantías.

Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal, evacuando el traslado que el día 26 del corriente se me ha dado, expone: que en su concepto procede el recurso de amparo promovido por el C. Lic. Luis B. Santaella á nombre de Pedro Reyes, contra la sentencia de muerte pronunciada por la autoridad política de Silacayoapan, y así pide á vd. se sirva decretarlo, por lo que brevemente pasa á manifestar; reservándose al tiempo de alegar, ampliar los fundamentos de su pedido.

Basta saber que los delitos de asalto, robo, plagio é incendio, por los que fué sentenciado á la última pena el quejoso Reyes, fueron cometidos en 17 de Marzo de 1870; y que la autoridad política funda su fallo en las disposiciones de 20 de Abril del presente año, 18 de Abril de 1870 y 12 de Junio de 1871, posterior á los hechos referidos, para persuadirse que la violacion es flagrante de la garantía á que se refiere el art. 14 de la Carta Federal, puesto que segun éste, "nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exsactamente aplicadas á él."

Por lo espuesto, este Ministerio pide á

vd. se sirva en definitiva, amparar al quejoso en los términos que lo ha solicitado.

Oaxaca de Juarez, Diciembre 28 de 1874.
 —*José M. Ballesteros.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Oaxaca de Juarez, Enero 25 de 1875.

Visto el presente juicio de amparo promovido por Pedro Reyes de San Pedro Aite, Distrito de Morales, contra la sentencia de muerte que pronunció en 20 de Mayo de 1874, el Jefe Político de Silacayoapan, por los delitos de asalto y plagio, robo é incendio perpetrados en cuadrilla y en despojado, por creer violadas en su persona las garantías que otorga la Constitucion General de la República en sus arts. 14 y 20, frac. 5ª: Vistas las constancias de la causa que en testimonio corre agregada; lo pedido por el Ministerio fiscal; lo alegado por el defensor y personero del quejoso y cuanto mas ver convino.

Considerando: que en el procedimiento para la averiguacion de los delitos de que fué acusado Reyes, aparece, (fs. 9 del testimonio), que despues de hecha la confesion con cargos no se le requirió para que nombrase defensor ó en su caso se le nombrara de oficio, sino que inmediatamente aparece la citacion para sentencia.

Considerando: que si bien es cierto la frac. 5ª del art. 20 citado previene que al acusado se le oiga en defensa por sí ó por persona de su confianza, y en la causa no aparece que se le haya prohibido una ú otra cosa, tambien lo és, que la autoridad no mandó que se defendiera de los cargos por persona ilustrada, segun el espíritu de la disposicion citada que previene, que á los acusados se les manifieste la lista de los defensores de oficio.

Considerando: que á todo acusapo dormas ilustracion que se le suponga, lo agovia la idea del castigo que debe imponersele por el delito que se le imputa si es inocente, ó la perpetracion del crimen que és el tomen-

tó que roe el corazón y mata la conciencia, y en ambos casos es incapáz de defenderse á sí propio.

Considerando: que siendo la defensa del acusado requisito esencial en el juicio criminal, su falta vicia el procedimiento y és una violacion de la garantía otorgada por el art. 20 del Código fundamental.

Considerando: que todo delito debe ser castigado conforme á las leyes vigentes en la época de su comision, pues de lo contrario resultaria, que las acciones se juzgaran punibles sin que hubiera ley que las calificara, ya por que esta no existiera, ó por que estuviera derogada.

Considerando: que la imposicion de una pena conforme á una ley promulgada con posterioridad al hecho que se castiga, es la retroaccion del mandato para someter á su imperio actos sucedidos en épocas pasadas.

Considerando: que la ley és la regla que dirige las acciones, y el principio conservador de los intereses, honra y vida de los hombres; es consiguiente que su aplicacion no debe hacerse á los tiempos pasados, sino á los venideros.

Considerando: que los delitos por que fué juzgado y sentenciado el quejoso Pedro Reyes, tuvieron lugar el 17 de Marzo de 1870, en cuya época regía la ley de 13 de Abril de 1869 y no la de 18 de Abril de 1870 en que se apoya el Jefe Político para pronunciar su fallo.

Considerando: que tal aplicacion es una violacion flagrante de la garantía concedida en el art. 14 de la Constitucion General, pues se castiga un delito con leyes espeditas con posterioridad á su comision.

Considerando por último: que las leyes de 18 de Abril de 1870, de 12 de Junio de 1841, de 20 de Abril de 1874 en que se fundó el Jefe Político para pronunciar su citado fallo, no estaban vigentes el 17 de Marzo de 1870, fecha de la perpetracion de los delitos de que fué acusado Reyes: La Justicia federal con fundamento de los arts. 14, 20 frac. 5º, 101 y 102 de la Constitu-

TOMO VII—PARTE II.

cion federal, y art. 1º frac. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, declara: que ampara y protege al quejoso Pedro Reyes, contra la sentencia pronunciada por el C. Jefe Político de Silacayoapam en 20 de Mayo de 1860, que lo condenó á muerte por los delitos de asalto y plagio, robo é incendio. Hágase saber; saquese copia de este fallo para su publicacion en los periódicos "Diario Oficial" y "Semanario Judicial de la Federacion" y elévese éste juicio en revision á la Suprema Corte de Justicia. El C. Juez 3º suplente de Distrito en ejercicio, lo sentenció y firmó. Doy fé.—*F. Perez*—*Manuel Galindo*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 14 de 1875.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca, por el C. Lic. Luis B. Santaella, en representacion del reo Pedro Reyes, quejándose de que el C. Jefe Político de Silacayoapam ha vulnerado en la persona de Reyes, las garantías á que se refiere el art. 14 y la frac. 5ª del 20 de la Constitucion federal, condenándolo á la última pena como á reo de asalto, robo, plagio é incendio.

Considerando: que en el expediente aparece, que Reyes confesó haber concurrido con otros á la comision de ese delito, que se verificó en 17 de Marzo de 1870; fué condenado á la última pena por el referido Jefe Político, aplicándole leyes posteriores á esa fecha, lo cual importa la vulneracion de la garantía á que se refiere el art. 14 de la Constitucion General. Por lo expuesto, y de conformidad con lo que dispone el art. 101 de la misma, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio á 25 de Enero último por el Juez de Distrito de Oaxaca, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al quejoso Pedro Reyes,

82

contra la sentencia pronunciada por el C. Jefe Político de Silacayoapam, que lo condenó á muerte por los delitos de asalto, plagio, robo é incendio: y que la causa debe remitirse á la autoridad competente, para juzgar á Reyes.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*E. Montes.*—*Simón Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, secretario.

- Es copia que certifico. México, Julio 30 de 1875.—*Enrique Landa*, Oficial Mayor.

AUTOS

Promovidos por la Hacienda Pública contra el C. Juan Aldaiturriaga, relativos á un saldo de siete mil doscientos pesos procedentes de una operacion sobre bienes nacionalizados.

Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

Habiendo redimido el C. Juan Aldaiturriaga en 1869, varios capitales eclesiásticos por valor de ocho mil pesos, sin que esta operacion hubiera tenido su verificativo por no existir los capitales designados, le fué sustituida aquella cantidad oportunamente, con el capital de cinco mil doscientos cincuenta y un pesos impuestos sobre la casanúm. 13, sita en la plaza principal de

Pátzcuaro perteneciente á la testamentaria de D. Matías Tejada, y con el de dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos que á varias corporaciones reconocia la hacienda de Ayumba, resultando en contra del C. Aldaiturriaga, un adeudo en bonos de siete mil doscientos pesos.

La Jefatura de Hacienda obrando con total sujecion al Supremo decreto de 13 de Julio de 1869, formó el expediente respectivo de redencion, asegurando para la Hacienda pública federal, la parte que en bonos debia entregar el responsable á consecuencia de la operacion practicada á su favor. Como este adeudo no ha sido satisfecho á los plazos vencidos, sin embargo de que el deudor ha obtenido para el efecto varias prórogas del Ministerio de Hacienda, ha sido preciso exigir el cobro judicialmente, para lo cual este Ministerio puso demanda en forma en 5 de Enero próximo pasado, siguiéndose este juicio en rebeldía por no haber querido presentarse la parte demandada.

Como esta no rindió prueba alguna, debe sin duda resolverse la presente cuestion á favor de la Hacienda federal, considerando las pruebas que obran en el expediente auténtico formado por la Jefatura de Hacienda en virtud de las facultades del citado decreto de 13 de Julio de 1869. Registrando cada uno de estos antecedentes, se vé á cada paso consignada de la manera mas expresa la confusion del responsable, y para quitar absolutamente toda duda se registra á la foja 32 la manifestacion mas franca y espontánea por la parte de Aldaiturriaga acerca de la cesion que hace á favor de la Jefatura de Hacienda, de la casa sita en Pátzcuaro para cubrir en parte el adeudo. Sin negar esto y tan solo por libertarse del embargo, pretendió últimamente hacer valer que la escritura de imposicion estaba cancelada, sin duda para deducir de aquí que no debian tener valor alguno los pagarés otorgados á la oficina. Pero esta escepcion sobre no tener valor al-